

Señores,

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO DE CALI

Oficina de Reparto

repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co

ASUNTO:	DEMANDA
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	ALLIANZ SEGUROS S.A.
DEMANDADO:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía N° 19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, titular de la Tarjeta Profesional N° 39.116 del C. S. de la J, obrando como apoderado general de la Compañía **ALLIANZ SEGUROS S.A.**, sociedad comercial anónima de carácter privado, legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con NIT 860.026.182-5, sometida al control y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera, conforme con la Escritura Pública No. 5.107 otorgada el 5 de mayo de 2004 en la Notaría Veintinueve (29) del Círculo de Bogotá D.C. que se aporta. Respetuosamente impetro ante su despacho **DEMANDA** - medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contra la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA**, representada legalmente por el señor **CARLOS MARIO ZULUAGA PARDO**, en su calidad de Contralor General de la República, o quien haga sus veces; con el fin de que se declare la nulidad de los actos administrativos que a continuación se relacionan: i) Fallo No. 010 de fecha 03 de octubre de 2023 con Responsabilidad Fiscal del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2018-01178, ii) Auto No. 742 de fecha 10 de noviembre de 2023 mediante el cual se resuelve recursos de reposición contra el Fallo No. 010 de fecha 03 de octubre con Responsabilidad Fiscal del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2018-01178, iii) Auto No. 775 de fecha 4 de diciembre de 2023 mediante el cual se resuelve solicitud de aclaración del Fallo No. 010 de fecha 03 de octubre de 2023 con Responsabilidad Fiscal del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2018-01178, y, iv) Auto No. URF2- 0054 de fecha 15 de enero de 2024 por medio del cual se resuelve el grado de consulta del Fallo con responsabilidad fiscal No. 010 del 3 de octubre de 2023 y en general los actos administrativos proferidos dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF2018-01178 de conformidad con el artículo 163¹ del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y a su vez, se ordene el restablecimiento del derecho, conforme a las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico:

¹ **ARTÍCULO 163. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES.** Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. **Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron.**

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.” (subrayado y negritas propias).

Capítulo I. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA

Previo la exposición de los enunciados fácticos y jurídicos que fundamentan la presente demanda, es importante indicarle al despacho que este escrito se presenta dentro del término correspondiente, en atención al literal d) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que establece que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho debe presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo previo agotamiento del requisito de procedibilidad. En el caso en concreto, el Auto No. URF2- 0054 del 15 de enero de 2024 por medio del cual se resolvió el grado de consulta del fallo con responsabilidad fiscal No. 010 del 3 de octubre de 2023 se notificó por estado el día 24 de enero de 2024, por lo que el término de caducidad transcurriría desde el 25 de enero de 2024 hasta el día 27 de mayo de 2024, ahora bien, se suspendió la caducidad el 27 de mayo de 2024, cuando se radicó la solicitud de conciliación por tres (3) meses, razón por la cual el presente medio de control se presenta dentro del término legal oportuno.

Ahora bien, frente al **agotamiento del requisito de procedibilidad**, es importante señalar al despacho lo siguiente: el 27 de mayo de 2024, se radicó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría delegada para asuntos administrativos de reparto de Cali, asunto que por asignación le correspondió a la Procuraduría 19 Judicial II Para Asuntos Administrativos, el cual mediante auto del 24 de junio de 2024 tuvo por desistida y no presentada la solicitud de conciliación, en razón a que no fue aportada la prueba de la constancia de recibido del traslado realizado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por lo que se presentó recurso de reposición sin embargo el Ministerio Público finalmente resolvió negativamente el mismo.

Sin embargo, se equivoca esa judicatura al indicar que no se corrió traslado a la Agencia Nacional Jurídica del Estado, toda vez que el mismo día que se radicó la solicitud de conciliación (24 de mayo de 2024), se remitió copia a la ANJE, tal y como se acredita en la imagen adjunta extraída del texto original el cual también se adjunta como prueba a la presente demanda:

CONSTANCIA DE ENVÍO SOLICITUD DE CONCILIACIÓN POR ALLIANZ SEGUROS S.A.
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 12 DEL ARTÍCULO 101 DE LA LEY 2220 DE
2022// CONVOCADO: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – GERENCIA
DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA|

Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Vie 24/05/2024 15:35

Para:cgr@contraloria.gov.co <cgr@contraloria.gov.co>;responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co
<responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co>;notificacionesjudiciales@contraloria.gov.co
<notificacionesjudiciales@contraloria.gov.co>

CC:notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co <notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co>
Cco:Alejandro De Paz Martinez <adepaz@gha.com.co>

📎 1 archivos adjuntos (30 MB)

SOLICITUD DE CONCILIACIÓN POR ALLIANZ SEGUROS S.A. PRF- 2018-01178.pdf;

Señores,

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (REPARTO)

ASUNTO: SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

CONVOCANTE: ALLIANZ SEGUROS S.A.

CONVOCADO: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DE
CAUCA

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Por lo tanto, el requerimiento realizado por la Procuraduría referente a realizar la radicación del traslado a través del enlace: <https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx>; obedece únicamente a un formalismo que, según se indica en la providencia, “(...) es necesario para el ingreso de la solicitud de conciliación al sistema de información misional de la Procuraduría General de la Nación”. No obstante, lo anterior, como se comprueba de los anexos adjuntos al presente escrito, en búsqueda de continuar con el trámite y en procura de la garantía de la administración de justicia de mi procurada, la solicitud también fue enviada en el marco del recurso ya mencionado por dicho enlace y de nuevo a través de correo electrónico. Por lo tanto, pese a que se presentaron dichos argumentos ante la procuraduría conocedora del asunto a través del mecanismo de recurso de reposición, esta decidió no reponer el auto que tiene por no presentada la solicitud de conciliación, razón por la cual se presentara medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra este organismo del Ministerio Público.

Como puede notar el operador judicial, el suscrito sí cumplió con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 2220 de 2022 e intentó por todos los medios existentes agotar el requisito de procedibilidad, pero por situaciones ajenas a esta compañía aseguradora, la Procuraduría 19 Delegada Para Asuntos Administrativos no admitió la solicitud de conciliación, por lo que ruego a esta judicatura admitir la presente demanda y suspenda por prejudicialidad teniendo en cuenta que primero deberá resolverse el medio de control de reparación directa que se interpondrá en contra la Procuraduría General de la Nación por esta irregularidad.

Frente a la prejudicialidad, el Consejo de Estado² ha señalado lo siguiente:

² Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta No. 19258 del 01 de marzo de 2013

“La prejudicialidad es una figura jurídica que implica la suspensión temporal de la competencia del juez en un caso concreto hasta tanto se decida otro proceso cuya decisión tenga incidencia en el que se suspende. La suspensión del proceso por prejudicialidad tiene como finalidad evitar que se profieran decisiones contradictorias en procesos que tienen estrecha relación. Esto es, el fin de esta figura es la uniformidad de la aplicación concreta del derecho. De modo que si el juez encuentra acreditada la prejudicialidad tiene la obligación de suspender el proceso, pues la decisión que deba tomar se supeditarán a la que dicte el juez del otro proceso. Ahora, la prejudicialidad no se configura sólo porque en dos procesos se presenten identidad de partes, identidad de objeto e identidad de causa, ni porque exista una simple relación entre dos procesos. Para que haya prejudicialidad en materia contenciosa administrativa es necesario que haya un proceso en curso en el que se decida la legalidad de un acto administrativo de carácter general y un proceso en curso en el que se decida sobre la nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos de carácter particular y concreto que se hayan expedido con fundamento en el acto administrativo general, que también está demandado. También podría ocurrir que haya dos procesos en los que se decida sobre la nulidad de actos administrativos particulares y concretos que dependan entre sí. Tal es el caso de los procesos en los que se demanda la liquidación oficial de renta en el que se desconoce el saldo a favor y el proceso en el que se demandan los actos en que se impuso la sanción por devolución improcedente, por cuanto la decisión que se tome en el primer proceso repercute directamente en el otro. La sanción depende de que se mantenga o no el saldo a favor en la liquidación oficial cuestionada. De lo anterior se concluye que para que el juez suspenda un - proceso, en espera de la decisión de otro, debe acreditarse la existencia de una inevitable conexión entre ambos procesos. .” **(negrilla y subrayada por fuera del texto original)**

Del texto anterior, se infiere que el asunto de marras puede ser objeto de suspensión temporal hasta que el juez competente dirima el asunto relacionado anteriormente contra la Procuraduría General de la Nación, máxime cuando esta situación no puede ser resulta por el operador judicial que conozca el presente medio de control.

Capítulo II. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES

LA PARTE DEMANDANTE:

ALLIANZ SEGUROS S.A., sociedad comercial anónima de carácter privado, legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con NIT 860.026.182-5, sometida al control y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera, y actuando como apoderado general de ella, el suscrito **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con certificado que se allega al expediente. La demandante puede recibir notificaciones a través de correo electrónico notificacionesjudiciales@allianz.co o a través del buzón electrónico del suscrito apoderado notificaciones@gha.com.co.

LA PARTE DEMANDADA:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA - Unidad Delegada para Responsabilidad Fiscal – Intervención Judicial y Cobro Coactivo, órgano de control del Estado de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal, sin personería jurídica, representada legalmente por el señor CARLOS MARIO ZULUAGA PARDO, o quien haga sus veces con dirección de notificaciones en la Carrera 69 No 44 - 35 y el correo electrónico cgr@contraloria.gov.co, responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co notificacionesjudiciales@contraloria.gov.co.

Capítulo III. ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTROVERTIDOS

Los actos administrativos controvertidos son los siguientes:

3.1. Auto No. 0671 de fecha 14 de diciembre de 2018 *“POR EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2018-01178. ENTIDAD AFECTADA: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.”*

3.2. Auto No. 353 de imputación de responsabilidad fiscal dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178 de fecha 24 de mayo de 2023.

3.3. Fallo No. 010 con responsabilidad fiscal del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF2018-01178 de fecha 03 de octubre de 2023.

3.4. Auto No. 742 de fecha 10 de noviembre de 2023 que resuelve recursos de reposición contra el Fallo No. 010 con responsabilidad fiscal proferido en el proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178.

3.5. Auto No. 775 de fecha 4 de diciembre de 2023 que resuelve solicitud de aclaración del Fallo No. 010 con responsabilidad fiscal proferido dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178.

3.6. Auto No. URF2- 0054 del 15 de enero de 2024 por medio del cual se resuelve el grado de consulta del fallo con responsabilidad fiscal No. 010 del 3 de octubre de 2023 dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178.

3.7. Demás actos administrativos que los integren, aclaren, adicionen, modifiquen, les sean accesorios, consecuentes o subsiguientes; proferidos dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178.

Capítulo IV. HECHOS:

En este capítulo se presentarán los hechos en los que encuentra fundamento esta demanda, conservando una estructura lógica de la siguiente forma: (i) hechos generales del proceso en los que se evidencia la ausencia de cobertura material de la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 y ii) hechos relacionados con el desconocimiento de la prescripción establecida en el artículo 120 de la Ley 1474 de 2011.

4.1. PRIMERO: El 21 de junio de 2017, mediante radicado No. 2017ER0061023, el Subdirector del Centro de Tecnologías Agroindustriales de la Regional Valle del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, trasladó a la Contraloría General de la República actuaciones que presuntamente dieron cuenta que durante la vigencia 2016 el Centro de Tecnologías Agroindustriales de la Regional Valle del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, realizó proceso de toma física de inventario a los bienes que se encontraban en almacén bajo custodia y responsabilidad del señor Carlos Andrés García Ortiz identificado con cédula de ciudadanía No. 1.112.763.245, encontrando un faltante de elementos por valor de \$56.482.323,23.

4.2. SEGUNDO: Adicionalmente, el Centro de Tecnologías Agroindustriales de la Regional Valle del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, identificó que el señor Carlos Andrés García Ortiz incurrió presuntamente en bajo irregular de veinticuatro (24) Tablet según transacción No. 129, acta de baja de almacén del 31 de agosto de 2015 por valor de \$19.651.764,72 y de herramienta de mano según transacción No. 141, acta de baja de almacén del 25 de septiembre de 2015 por valor de \$6.958.364,50.

4.3. TERCERO: El día 14 de diciembre de 2018, como consecuencia de lo anterior, la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 268 de la Constitución Política de 1991, la Ley 610 de 2000, la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución Orgánica No. 5500 de 2003 modificada por la Resolución No. 5868 de 2007 y la Resolución No. 6541 de 18 de abril de 2012, profirió Auto No. 0671 mediante el cual se resolvió, entre otras cosas, *“Abrir el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2018-01178, por el presunto detrimento patrimonial ocasionado al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA. Nit. 899.999.034, en cuantía de OCHENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$83.092.452,45), sin indexar; sin indexar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.” y “Vincular como presunto responsable al Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2018-01178, al señor CARLOS ANDRES GARCIA ORTIZ, CC. No. 1.112.763.245, en calidad de almacenista durante la época de los hechos.”*

4.4. CUARTO: El día 24 de mayo de 2023, la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca profiere el Auto No. 353 mediante el cual resuelve, entre otras cosas, lo siguiente: *“Imputar responsabilidad fiscal dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2018-01178, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 610 de 2000, en contra de CARLOS ANDRES GARCIA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.112.763.245, en calidad de almacenista del Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago del SENA Regional Valle, con funciones de Almacenista, durante la época de los hechos, respecto del detrimento patrimonial ajustado a SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$*

69.231.332,45), sin indexar, causado al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA-Regional Valle del Cauca. NIT. 899.999.034, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.” y “Mantener en calidad de tercero civilmente responsable dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2018-01178 y respecto de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$49.579.567,73) del valor del daño, a las aseguradoras que se relacionan a continuación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia: 1) En virtud de la POLIZA MANEJO GLOBAL ENTIDADES ESTATALES. No. 2201215004476, Vigencia 09 septiembre de 2015 al 09 de septiembre de 2016 y Renovación del 09 de septiembre de 2016 al 30 de marzo de 2017 a las aseguradoras: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA, identificada con el Nit. 091.700.037-9, participación: 16%; A.I.G COLOMBIA SEGUROS GENERALES, hoy SBS SEGUROS COLOMBIA S.A, identificada con el Nit. No. 860037707-9, participación: 14%; ALLIANZ SEGUROS SA, identificada con el Nit. No. 860026182-5, participación 14%; COMPAÑÍA DE SEGUROS COLPATRIA -AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., identificada con el Nit. No. 860.002.184-6, participación 14%; COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS o SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, identificada con el Nit. No.890903407-9, participación 14%; LIBERTY SEGUROS S.A., identificada con el Nit. No. 860039988, participación 14%. 2) En virtud de la POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES No. 2201215004488. Vigencias: Del 09 de septiembre de 2015 al 09 de septiembre de 2016 y del 08 de septiembre de 2016 al 30 de marzo de 2017 a las aseguradoras: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA, identificada con el Nit. No. 091.700.037-9, participación 25%; ALLIANZ SEGUROS S.A., identificada con el Nit. No.860026182-5, participación 18,4%; AXA COLPATRIA SEGUROS SA, identificada con el Nit. No. 860.002.184-6, participación 14%; ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A., identificada con el Nit. No. 860002534, participación 10%; COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS o SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, identificad con el Nit. No. 890903407-9, participación 18,60%; SBS SEGUROS COLOMBIA S.A, identificada con el Nit. No. 860037707-9, participación 14%.”

4.5. QUINTO: El día 3 de octubre de 2023, la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca profirió el Fallo No. 010 con responsabilidad fiscal dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178 en el cual se resolvió, entre otras cosas, lo siguiente: “FALLAR con responsabilidad fiscal dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, en contra de CARLOS ANDRES GARCIA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.112.763.245, en calidad de almacenista del Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago del SENA Regional Valle, durante la época de los hechos, respecto del detrimento patrimonial causado al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA-Regional Valle del Cauca. Nit. No. 899.999.034, establecido en NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$99.588.952,8)-indexados, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.” y “DECLARAR como terceros civilmente responsables dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal y respecto de la suma de SETENTA Y UN MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON NUEVE CENTAVOS (\$ 71.013.585,9)-indexados, del valor del daño, a las aseguradoras que se relacionan a continuación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia: 1) En virtud de la POLIZA MANEJO GLOBAL ENTIDADES ESTATALES. No. 2201215004476, Vigencia 09 de septiembre de 2015 al 09 de septiembre de 2016 y Renovación del 09 de septiembre de 2016 al 30 de marzo de 2017 a las aseguradoras: MAPFRE SEGUROS

GENERALES DE COLOMBIA. Nit. No. 891.700.037-9, participación: 16%; A.I.G COLOMBIA SEGUROS GENERALES, hoy SBS SEGUROS COLOMBIA S.A, identificada con Nit. No. 860037707-9, participación: 14%; ALLIANZ SEGUROS SA, identificada con Nit. No. 860026182-5, participación 14%; COMPAÑÍA DE SEGUROS COLPATRIA-AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., identificada con Nit. No. 860.002.184-6, participación 14%; COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS o SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, identificada con Nit. No. 890903407-9, participación 14%; LIBERTY SEGUROS S.A., identificada con Nit. No. 860039988, participación 14%. 2) En virtud de la POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES No. 2201215004488. Vigencias: Del 09 de septiembre de 2015 al 09 de septiembre de 2016 y del 08 de septiembre de 2016 al 30 de marzo de 2017 a las aseguradoras: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA. Nit. No. 891.700.037-9, participación 25%; ALLIANZ SEGUROS S.A., identificada con Nit. No. 860026182-5, participación 18,4%; AXA COLPATRIA SEGUROS SA, identificada con NIT. 860.002.184-6, participación 14%; ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A., identificada con Nit. No. 860002534, participación 10%; COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS o SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, identificad con Nit. No. 890903407-9, participación 18,60%; SBS SEGUROS COLOMBIA S.A, identificada con Nit. No. 860037707-9, participación 14%.”

4.6. SEXTO: El Fallo No. 010 del 3 de octubre de 2023 proferido por la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178 se encuentra viciado de nulidad pues, de conformidad con las causales contempladas en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el acta administrativo en cuestión fue expedido mediante falsa motivación y con infracción de las normas en que debía fundarse, en especial , violando las disposiciones normativas relativas al contrato de seguro como lo son el artículo 1056 del Código de Comercio y el artículo 120 de la Ley 1474 de 2011, pues se afectó la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 que **NO** ofrecía cobertura material para el caso en concreto, en otras palabras, se afectó un contrato de seguro que **NO** había amparado la responsabilidad fiscal y/o los fallos con responsabilidad fiscal.

4.7. SÉPTIMO: El día 12 de octubre de 2023, dentro del término legalmente conferido, Allianz Seguros S.A. interpuso recurso de reposición en contra del Fallo con responsabilidad fiscal No. 010 del 03 de octubre de 2023.

4.8. OCTAVO: El día 10 de noviembre de 2023, la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca profirió el Auto No. 742 mediante el cual se resuelve los recursos de reposición presentados contra el Fallo No. 010 con responsabilidad fiscal en el proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. PRF-2018-01178, resolviendo, entre otras cosas, lo siguiente: “*NEGAR las solicitudes de revocar o modificar el Fallo con responsabilidad fiscal No. 010 del 03 de octubre de 2023, en el Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2018-01178, adelantado por el detrimento patrimonial ocasionado al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA, radicadas con los recursos de reposición interpuestos dentro del trámite legal, por el DEFENSOR DE OFICIO DE CARLOS ANDRES GARCIA y los terceros civilmente responsables: 1) MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA Nit. No. 891.700.0379, 2) SBS SEGUROS COLOMBIA S.A Nit. No. 860037707-9, 3) ALLIANZ SEGUROS S.A. Nit. No. 860026182-5, 4) COMPAÑÍA DE SEGUROS COLPATRIA -AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Nit. No. 860.002.184-6,*

5) *COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS o SEGUROS GENERALES SURAMERICANA Nit. No. 890903407-9, 6) LIBERTY SEGUROS S.A. Nit. No. 860039988 y 7) ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. Nit. No. 860002534; por los argumentos planteados en la parte considerativa de la presente providencia.*”

4.9. NOVENO: El día 4 de diciembre de 2023, la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca profirió el Auto No. 775 por medio del cual se resolvió una solicitud de aclaración del fallo No. 010 con responsabilidad fiscal proferido dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178, resolviendo, entre otras cosas, aclarar el artículo segundo del fallo con responsabilidad fiscal No. 010 del 3 de octubre de 2023.

La aclaración realizada por la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca en el Auto No. 775 consistió en precisar que se afectaba la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 pues dicho contrato de seguro tenía un deducible menor, todo lo anterior sin tener en cuenta los amparos y exclusiones pactadas en dicho negocio asegurativo.

4.10. DÉCIMO: El día 15 de enero de 2024, la Contraloría General de la República – Unidad de Responsabilidad Fiscal profirió el Auto No. URF2- 0054 por medio del cual se resuelve el grado de consulta del fallo con responsabilidad fiscal No. 010 del 3 de octubre de 2023, resolviendo, entre otras cosas, lo siguiente: *“CONFIRMAR en su totalidad el Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 010 del 6 de octubre de 2023 y el Auto No. 742 del 10 de noviembre de 2023, por medio del cual se resolvieron los Recursos de Reposición, proferidos por la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF No. 2018-01178, de conformidad con los argumentos que anteceden.”*

4.11. UNDÉCIMO: El día 16 de febrero de 2024, en virtud de lo dispuesto en el fallo con responsabilidad fiscal No. 010 del 03 de octubre de 2023, se realiza respecto de Allianz Seguros S.A. el recaudo empresarial N°2856519 a través de la cuenta del Banco Popular N°110-050-00119-7, por valor de DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE \$12.543.840 a favor de la Dirección del Tesoro Nacional.

El pago efectuado por Allianz Seguros S.A. se realizó en virtud del Auto No. 775 mediante el cual se aclaró el Fallo No. 010 y del Auto No. URF2-005 por medio del cual se resolvió el grado de consulta que precisaron que el pago debía hacerse a cargo de la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 por el hecho de que dicho negocio jurídico contemplaba un deducible a cargo del asegurado que era menor a las otras pólizas vinculadas al proceso ordinario de responsabilidad fiscal.

4.12. DÉCIMO SEGUNDO: El día 23 de febrero de 2024, en virtud del pago efectivo de la obligación por parte de Allianz Seguros S.A., se realizó una petición ante la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, mediante la cual se solicitó el archivo del procedimiento y la desvinculación de la compañía de seguros.

Capítulo V. PRETENSIONES

5.1.1. PRIMERA: Que, una vez surtido el trámite correspondiente, se **DECLARE LA NULIDAD** de la totalidad de los siguientes actos administrativos proferidos dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2018-01178:

1. Auto No. 0671 de fecha 14 de diciembre de 2018 *“POR EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF2018-01178. ENTIDAD AFECTADA: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.”*
2. Auto No. 353 de imputación de responsabilidad fiscal dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178 de fecha 24 de mayo de 2023.
3. Fallo No. 010 con responsabilidad fiscal del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178 de fecha 03 de octubre de 2023.
4. Auto No. 742 de fecha 10 de noviembre de 2023 que resuelve recursos de reposición contra el Fallo No. 010 con responsabilidad fiscal proferido en el proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178.
5. Auto No. 775 de fecha 4 de diciembre de 2023 que resuelve solicitud de aclaración del Fallo No. 010 con responsabilidad fiscal proferido dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178.
6. Auto No. URF2- 0054 del 15 de enero de 2024 por medio del cual se resuelve el grado de consulta del fallo con responsabilidad fiscal No. 010 del 3 de octubre de 2023 dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178.
7. Demás actos administrativos que los integren, aclaren, adicionen, modifiquen, les sean accesorios, consecuentes o subsiguientes; proferidos dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178.

5.1.2. SEGUNDA: Que además de declarados nulos los actos administrativos descritos, se **DECRETE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** al que haya lugar, incluyendo el **REINTEGRO** de toda suma de dinero que se hubiese cancelado por parte de mi representada con ocasión de tales actos administrativos, en concreto lo siguiente:

1. Solicito se ordene a la demandada, Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, restituir la totalidad de los valores que mi representada haya pagado, desembolsado o cancelado hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia. Los valores pagados por mi representada corresponden a la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$12.543.840) pago que fue realizado el 16 de febrero de 2024 en la cuenta autorizada a favor de la Dirección del Tesoro Nacional a la cuenta corriente No. 110-050-00119-7 del Banco Popular como consta en el Comprobante para recaudos empresariales N°2856519.

2. Que se declare que mi representada no está legal ni contractualmente obligada a afectar ninguno de los amparos contemplados en la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488, por el monto señalado por el ente de control fiscal. Esta solicitud se basa en la consideración de que se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa de mi representada, al no motivar de manera adecuada los actos administrativos acusados, expidiéndose con infracción de las normas en que debían fundarse y mediante falsa motivación.
3. Que se declare que mi representada no está legal ni contractualmente obligada a afectar ninguno de los amparos contemplados en la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488, por el monto señalado por el ente de control fiscal, toda vez que el contrato de seguro en cuestión no contempló ningún amparo por fallos con responsabilidad fiscal.
4. Que se declare que mi representada no está legal ni contractualmente obligada a afectar ninguno de los amparos contemplados en la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488, por el monto señalado por el ente de control fiscal, por cuanto prescribieron las acciones derivadas del contrato de seguro, falta de cobertura material y en general porque no se configuró el riesgo asegurado.

5.1.3. TERCERA: PAGAR a ALLIANZ SEGUROS S.A., el valor correspondiente a los intereses moratorios sobre las sumas de dinero que se hayan pagado conforme a los actos administrativos que se demandan, réditos que deberán liquidarse a la tasa máxima de interés corriente certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, incrementada en un cincuenta por ciento, conforme al artículo 1080 del Código de Comercio, modificado por la Ley 510 de 1999 con ocasión de la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488; intereses que se calcularán hasta la fecha de reembolso o pago de las sumas anteriormente indicadas.

5.1.4. CUARTA: En subsidio de la pretensión anterior, se **CONDENE** a la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA**, a pagar a mi representada las sumas de dinero que se hubiesen pagado conforme a los actos administrativos que se demandan, debidamente indexadas.

5.1.5. QUINTA: Prevenir a las demandadas para que den estricto cumplimiento a la sentencia que se profiera en el marco de este litigio, de conformidad con los artículos 187 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

5.1.6. SEXTA: Condenar a la demandada al pago de costas y agencias en derecho.

Capítulo VI. DISPOSICIONES JURÍDICAS VULNERADAS

Las normas que se vulneraron con los Actos Administrativos aludidos son los siguientes:

- Los Artículos 1056 y 1081 del Código de Comercio;
- Artículo 44 de la Ley 610 de 2000;
- Artículo 120 de la Ley 1474 de 2011

- Artículos 137, 138 y 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cabe aclarar que dando alcance a lo consagrado en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA, el concepto de la violación de cada una de las normas aquí citadas se encuentra en el acápite inmediatamente siguiente.

Capítulo VII. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

A. EL FALLO No. 010 CON RESPONSABILIDAD FISCAL PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2018-01178 Y LOS DEMÁS ACTOS QUE RESOLVIERON LOS RECURSOS INTERPUESTOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 163 DEL CPACA, SE EXPIDIERON CON INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 44 DE LA LEY 610 DE 2000 Y LOS ARTÍCULOS 1045, 1054 Y 1072 DEL CÓDIGO DE COMERCIO – INEXISTENCIA ABSOLUTA DE COBERTURA MATERIAL RESPECTO DE LA PÓLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES No. 2201215004488.

El fallo No. 010 con responsabilidad proferido dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178 y los demás actos que resolvieron los recursos interpuestos de conformidad con el artículo 163 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se expidieron con infracción de los artículos 44 de la Ley 610 de 2000 y los artículos 1045, 1054 y 1072 del Código de Comercio, pues resultaba absolutamente claro que no existía una cobertura material respecto de la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488, en la medida en que este último contrato de seguro **NO** contempló de ninguna forma los fallos de responsabilidad fiscal como riesgo asegurado.

Para sustentar el concepto de violación que ahora se propone, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que el artículo 1045 del Código de Comercio contempla los elementos esenciales del contrato de seguro de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 1045. <ELEMENTOS ESENCIALES>. Son elementos esenciales del contrato de seguro:

- 1) El interés asegurable;*
- 2) El riesgo asegurable;*
- 3) La prima o precio del seguro, y*
- 4) La obligación condicional del asegurador.*

En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno.”

Frente al interés asegurable la doctrina nacional ha tenido a bien en decir lo siguiente:

“... el artículo 1083 del C.Co. afirma que tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio puede resultar afectado, directa o indirectamente, ante la ocurrencia del riesgo, a condición que el aludido interés sea lícito y susceptible de estimarse en dinero (dado el carácter indemnizatorio del seguro). Es, pues, fundamental la presencia de una integridad patrimonial o económica amenazada (llámese cosas o derechos), de manera que resultan de interés asegurable los bienes determinados e individualizados, (amparables a través de seguros reales) o los derechos patrimoniales (susceptibles de protección mediante seguros patrimoniales). Igualmente ese interés puede manifestarse sobre el activo como el pasivo patrimonial (seguro de responsabilidad civil), y aun puede concretarse sobre bienes presentes o futuros, o la esperanza real y certera de futuras ganancias (seguro de lucro cesante). En todo caso, el patrimonio debe pertenecer a quien está en la posibilidad de verse expuesto directa o indirectamente a la realización del riesgo. Por ello, el maestro J. GARRIGUES expresa que en el seguro contra daños el interés asegurable resulta fundamental, y que puede estar referido a materiales o a derechos, y que su significación jurídica en este ramo de seguros consiste en que solo puede contratar quien tenga interés en que el siniestro no acontezca, por tener alguna relación económica con la cosa asegurada, no siendo necesario que ella sea jurídica, pues basta que sea de hecho (...).

(...)

*Precisando, **en el seguro de daños debe tenerse en cuenta que el objeto del mismo no es la cosa asegurada sino el interés que tenga el tomador. Ahora, ese interés no recae sobre el recibo o pago de la indemnización, sino que el riesgo amparado no ocurra (desde la perspectiva del asegurado).** En todo caso, el interés asegurable debe ser lícito, según lo anotamos antes, y en relación a una cosa susceptible de ser asegurada, de ahí que el seguro no puede generar un enriquecimiento injusto, ilegítimo o ilícito para el asegurado [ello tiene su razón de ser en que el seguro de daños es indemnizatorio, subsana la pérdida económica, mas no genera un incremento patrimonial, ventaja agregada o lucro para el asegurado]. Dicho interés entonces se manifiesta como una relación lícita en razón de la cual una persona sufre o soporta un daño patrimonial a causa de cierto hecho, o más sencillo aun, como una relación de cierta persona sobre una cosa que se encuentra amenazada por un riesgo específico.*

(...)³ (subrayado y negritas propias).

Visto lo anterior, para el caso en concreto y frente a la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 resulta claro que el interés asegurable del tomador resultaba los riesgos que rodeaban los bienes de su propiedad y/o bajo su custodia, pero nunca, de ninguna manera, significó amparar el riesgo de un fallo con responsabilidad fiscal pues para ello existen otro tipo de pólizas, siendo dichos fallos un riesgo que no se encontraba asegurado debido a las exclusiones pactadas, como más adelante se expondrá.

³ Becerra Toro, R. (2014). Nociones fundamentales de la teoría general y regímenes particulares del contrato de seguro. Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Jurídica y Política, Carrera de Derecho.

La evidente incompatibilidad entre la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 y la responsabilidad fiscal o condenas derivadas de dicha responsabilidad, ha sido puesto de manifiesto por parte de la doctrina nacional. Así, por ejemplo, el profesor Juan Manuel Díaz – Granados Ortiz en el artículo de su autoría *“La responsabilidad fiscal y su incidencia en los seguros”*⁴ contempla una serie de pólizas que pueden objeto de vinculación en los procesos de responsabilidad entre las cuales se encuentran la de seguro de cumplimiento, la de seguro de manejo, la de servidores públicos, la de directores y administradores y la de responsabilidad profesional, sin que figure por ninguna parte las Pólizas Todo Riesgo Daños Materiales pues el riesgo asegurado en estas últimas dista de ser la responsabilidad fiscal, sino que únicamente pretende reponer los objetos que integran el interés asegurado o su valor de reposición por causas como la pérdida o la sustracción riesgos diferentes al de responsabilidad fiscal se insiste.

Ahora bien, frente al otro elemento esencial y característico de todo contrato de seguro, esto es, el riesgo asegurado, se tiene que la doctrina nacional ha dicho lo siguiente:

“3). EL RIESGO ASEGURABLE Todo seguro se funda en el riesgo, cuya peculiaridad estriba en trasladar al asegurador las consecuencias económicas del riesgo que acaezca, a cambio del pago de un precio o (prima). Con razón, el profesor J. GARRIGUES ilustra el punto diciendo que el riesgo, desde el punto de vista técnico-jurídico, es un elemento del contrato, pues, si la prima es el precio que tiene el riesgo, es lógico que el riesgo sea estructural en el seguro, al punto que como lo contratado es el riesgo, eso lo hace diferente a los demás contratos bilaterales [ver, ob cit., Tomo IV, pág. 286].

En estricto sentido no se trata de trasladar el riesgo de una persona a otra, sino de trasladar las consecuencias dañinas de su ocurrencia al asegurador. Lo que se traslada es la necesidad económica concreta que sufre el asegurado cuando se verifica el siniestro, es decir, la indemnización, o la necesidad abstracta establecida en el contrato, que se satisface mediante el pago de cierta suma de dinero, y en eso estriba la prestación a cargo del asegurador (...)

Si bien es cierto, el concepto de riesgo es sumamente amplio, se define, por ende, como el acontecimiento futuro e incierto (aleatorio, contingente) que no depende de la voluntad exclusiva del tomador, o de la del asegurado ni del beneficiario, de manera que los sucesos “ciertos” y los físicamente imposibles no tienen el carácter de “riesgo”, de suerte que no pueden ser asegurados, como tampoco puede serlo la duda acerca de si un hecho se ha cumplido o no (art. 1054 C.Co.). Por ello, el riesgo asegurable es de naturaleza contingente, sin que pueda depender por entero de la voluntad del tomador [hechos meramente potestativos suyos, que puede hacer o no hacer], asegurado o beneficiario, como se dijo, lo que implica que el carácter del riesgo es lo que determina la obligación condicional del asegurador, lo que trae como corolario que los hechos ciertos (a excepción de la muerte) y los hechos físicamente imposibles no tienen la calidad de riesgos asegurables. [El “riesgo asegurable” es conocido en la práctica aseguradora y normativa de diversas maneras: evento asegurable, evento dañino, interés tutelado por la póliza, contingencia amparada, etc.]. Conforme a lo dicho, el riesgo está siempre referido al

⁴ Díaz-Granados Ortiz, J. M. (2014). La responsabilidad fiscal y su incidencia en los seguros. *Revista Ibero-Latinoamericana De Seguros*, 23(40). Recuperado a partir de <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/11252>

acaecimiento de un hecho futuro cuya ocurrencia eventual teme el asegurador. Ahora bien, ese hecho riesgoso, futuro y eventual, puede afectar a las cosas o a las personas (como el seguro de vida, de accidentes, o de enfermedad). Debe tenerse igualmente presente que la diversidad o variedad del riesgo se traduce en múltiples formas y variedades del seguro, pero siempre habrá que individualizar en cada especie o subtipo de contrato, el riesgo que se contrata (lo cual debe quedar explícito en la póliza correspondiente). La primera lección que se recibe en materia de seguro es que la razón de ser y fundamento del contrato de seguro está en el riesgo. La duda de la aseguradora acerca de si el riesgo ha ocurrido o no ha sucedido no tiene carácter asegurable.

(...)⁵

Visto todo lo anterior, se tiene que no existía interés asegurable ni se había realizado un riesgo asegurado de la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488, pues lo cierto es que el interés del tomador de dicho contrato de seguro no recaía de ninguna forma en las afectaciones que le podría generar la responsabilidad fiscal de sus empleados, amparo que no fue incluido, así como tampoco se contempló como uno de los riesgos asegurados que el detrimento patrimonial tuviese su causa en un fallo con responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.

Dejando claro lo anterior, es decir, que en los riesgos asegurados en la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 **NO** se encuentra la responsabilidad fiscal, conviene traer a colación el condicionado particular y general que limitó el amparo otorgado en dicho negocio asegurativo:

⁵ Ibidem.

POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES

HOJA 5 de 20

INICIACION

COPIA

Ref. de Pago: 30907700634

INFORMACION GENERAL						
RAMO / PRODUCTO	POLIZA	CERTIFICADO	FACTURA	ENDOSO	OFICINA MAPFRE	DIRECCION OF. MAPFRE
265 / 690	2201215004488	0	0		CORREDORES BTA	CARRERA 14 NO 96-34 PISO 1
TOMADOR		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			NIT/C.C. 8999990341	
DIRECCION		TERNERA KM1 VIA TURBACO			CIUDAD CARTAGENA TELEFONO 6666661	

Coberturas Básicas

Todo Riesgo: Se otorga amparo bajo la modalidad de todo riesgo para las pérdidas y/o daños materiales que sufran los bienes amparados por cualquier riesgo o causas, incluidos, entre otros, rotura de maquinaria, equipo electrónico, sustracción con y sin violencia, hurto y hurto calificado, asonada, sabotaje y terrorismo) y demás que no se encuentren expresamente excluidas de las condiciones del seguro.

Además de todas las coberturas indicadas este numeral, se otorga amparo para los riesgos de Explosión, Anegación, Daños por Agua, Incendio inherente, Extended Coverage y cualquier otro riesgo o causas no expresamente excluidas de las condiciones generales del seguro.



POLIZA TODO RIESGO DE DAÑOS MATERIALES SIN LUCRO CESANTE.

CONDICIONES GENERALES

MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A., quien en adelante se denominará la Compañía, con sujeción a los términos y condiciones descritos en esta póliza, asegura los daños materiales accidentales, súbitos e imprevistos que sufran los bienes e intereses asegurados, como consecuencia de la realización de alguno de los riesgos previstos a continuación:

CONDICIONES GENERALES

CONDICIÓN PRIMERA-. RIESGOS AMPARADOS.

LA COMPAÑÍA SE OBLIGA, DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, AL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LOS DAÑOS MATERIALES DIRECTOS SUFRIDOS POR LOS BIENES ASEGURADOS UBICADOS EN LOS PREDIOS O INSTALACIONES DEL ASEGURADO (DETALLADOS EN LA PÓLIZA) COMO CONSECUENCIA DE UN HECHO SÚBITO, ACCIDENTAL E IMPREVISTO Y SUJETO A LAS EXCLUSIONES CONTENIDAS EN LA CONDICIÓN SEGUNDA:

Como se observa, en la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 **NO** figura, ni en su condicionado especial ni mucho menos en su condicionado general, la responsabilidad fiscal o los juicios de responsabilidad fiscal que son de competencia de la Contraloría General de la República.

Adicionalmente, se tiene que la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 fue tomada por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y como asegurado y beneficiario figura dicha entidad y **NO** alguno de sus empleados o subalternos, por lo que lo cierto es que mal se haría en considerar que se realizó el riesgo asegurado bajo dicho contrato de seguro cuando es claro que el responsable fiscal CARLOS ANDRES GARCIA ORTIZ **NO** fue objeto de aseguramiento, ni como tomador, ni como asegurado y mucho menos como beneficiario. Con todo lo anterior se quiere resaltar que **LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE DICHO FUNCIONARIO NO ERA OBJETO DE AMPARO** de la póliza en cuestión, por lo que la entidad convocada mal hizo en afectarla dado que **NO** se había realizado ninguno de los riesgos asegurados. La póliza es del siguiente tenor:

POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES

HOJA 1 de 20

INICIACION

COPIA

Ref. de Pago: 30907700634

INFORMACION GENERAL												
RAMO / PRODUCTO	POLIZA	CERTIFICADO	FACTURA	ENDOSO	OFICINA MAPFRE	DIRECCION OF. MAPFRE						
265 / 690	2201215004488	0	0		CORREDORES BTA	CARRERA 14 NO 96-34 PISO 1						
TOMADOR		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			NIT/C.C. 8999990341							
DIRECCION		TERNERA KM1 VIA TURBACO			CIUDAD CARTAGENA TELEFONO 6666661							
ASEGURADO		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			NIT/C.C. 8999990341							
DIRECCION		TERNERA KM1 VIA TURBACO			CIUDAD CARTAGENA TELEFONO 6666661							
BENEFICIARIO		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			NIT/C.C. 8999990341							
DIRECCION		TERNERA KM1 VIA TURBACO			CIUDAD CARTAGENA TELEFONO 6666661							

INFORMACION DE LA POLIZA														
FECHA DE EXPEDICION			VIGENCIA POLIZA				VIGENCIA CERTIFICADO							
DIA	MES	AÑO	INICIACION	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS	INICIACION	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
24	09	2015	INICIACION	00:00	09	09	2015	366	INICIACION	00:00	09	09	2015	366
			TERMINACION	00:00	09	09	2016		TERMINACION	00:00	09	09	2016	

Siendo todo lo anterior así, resulta claro que el fallo No. 010 con responsabilidad fiscal proferido dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178 se expidió con infracción de los artículos 1045, 1054 y 1072 del Código de Comercio, pues, a pesar de que el interés asegurable y los riesgos asegurados de la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 **NO** contemplaban los fallos con responsabilidad fiscal, la entidad convocada sin justificación alguna decidió afectar dicho contrato de seguro.

B. EL FALLO No. 010 CON RESPONSABILIDAD FISCAL PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2018-01178 Y LOS DEMÁS ACTOS QUE RESOLVIERON LOS RECURSOS INTERPUESTOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 163 DEL CPACA SE EXPIDIERON CON INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 44 DE LA LEY 610 DE 2000 Y 1056 DEL CÓDIGO DE COMERCIO .

El fallo No. 010 con responsabilidad fiscal de fecha 03 de octubre de 2023 proferido dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178 y los demás actos que resolvieron los recursos interpuestos de conformidad con el artículo 163 del CPACA se expidieron con infracción de los artículos 44 de la Ley 610 de 2000 y los artículos 1045, 1054, 1072 y 1083 del Código de Comercio, pues lo cierto es que la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 no ofrecía cobertura material para los hechos que eran materia de investigación por parte de la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca pues lo cierto es que debía afectarse la póliza que amparaba al presunto responsable sobre el cual recaía el proceso de responsabilidad fiscal.

Para sustentar el concepto de violación expuesto y la causal de nulidad por infracción de las normas en que debía fundarse en la cual incurre el fallo No. 010 con responsabilidad fiscal proferido dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178 y los demás actos que resolvieron los recursos interpuestos, debe iniciarse por tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000:

“ARTÍCULO 44. VINCULACIÓN DEL GARANTE. Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado.

La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de apertura del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste, con la indicación del motivo de procedencia de aquella.”

Como se observa, la disposición transcrita somete la vinculación de la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, al proceso de responsabilidad fiscal cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso se encuentren amparados por una póliza. Para el caso en concreto, se tiene que no debió haberse afectado la Póliza Todo

Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 pues esta **NO** contaba con un amparo específico proveniente de fallos con responsabilidad fiscal.

En esa medida, resulta claro que la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca no atendió al contenido del artículo traído a colación, olvido pues la convocada que frente a la vinculación de las compañías aseguradoras en los procesos de responsabilidad fiscal debe tenerse en cuenta cada uno de los pormenores de la relación aseguraticia, en especial, el riesgo asegurado. Sobre el particular, la H. Corte Constitucional en sentencias como la C-648 de 13 de agosto de 2002 con ponencia del Magistrado Jaime Córdoba Triviño ha dicho lo siguiente:

“...cuando el legislador dispone que la compañía de seguros sea vinculada en calidad de tercero civilmente responsable en los procesos de responsabilidad fiscal, actúa en cumplimiento de los mandatos de interés general y de finalidad social del Estado. El papel que juega el asegurador es precisamente el de garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se ocasionen al patrimonio público por el servidor público responsable de la gestión fiscal, por el contrato o el bien amparados por una póliza.

Es decir, la vinculación del garante está determinada por el riesgo amparado, en estos casos la afectación de patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones del contrato, la conducta de los servidores públicos y los bienes amparados, pues de lo contrario la norma acusada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber para las compañías de seguros de garantizar riesgos no amparados por ellas.

El derecho de defensa de la compañía de seguros está garantizado en el proceso de responsabilidad fiscal puesto que dispone de los mismos derechos y facultades que asisten al principal implicado, para oponerse tanto a los argumentos o fundamentos del asegurado como a las decisiones de la autoridad fiscal.

Por consiguiente, la vinculación del asegurador establecida en la norma acusada, además del interés general y de la finalidad social del Estado que representa, constituye una medida razonable, en ejercicio del amplio margen de configuración legislativa garantizado en estas materias por el artículo 150 de la Carta Política. Atiende los principios de economía procesal y de la función administrativa a que aluden los artículos 29 y 209 de la Constitución. Además, evita un juicio adicional para hacer efectivo el pago de la indemnización luego de la culminación del proceso de responsabilidad fiscal, con lo cual se logra, en atención de los principios que rigen la función administrativa, el resarcimiento oportuno del daño causado al patrimonio público. Así, desde la perspectiva del reparo de constitucionalidad formulado, no hay vulneración de las normas invocadas por los demandantes.” (subrayado y negritas propias).

La anterior posición jurisprudencial que, además ha sido reiterada por la H. Corte Constitucional en otras tantas sentencias como la C-735 de 26 de agosto de 2003 con ponencia del Magistrado Álvaro Tafur Galvis, implica que las compañías de seguros vinculadas a procesos de responsabilidad fiscal sólo responden por aquellos amparos que han sido contratados por sus tomadores y asegurados.

De igual forma, se tiene para el caso en concreto, la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 contempló una serie de exclusiones que, de acuerdo, con los hechos que fueron materia de investigación por parte de la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, implicaban que Allianz Seguros S.A. no tuviese que asumir ninguna condena pues no existía cobertura frente a los actos realizados por el presunto responsable fiscal.

Para el caso en concreto, la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488, en el condicionado general identificado con el No. 01122012-1326-P-07-00000VTE079NOV12, aplicable según la caratula de la misma Póliza Todo Riesgos Daños Materiales, contempló las siguientes exclusiones:

*“Esta póliza no ampara las pérdidas o daños, que sean ocasionadas directa o indirectamente por: (...) 2.4. **Dolo o culpa grave del Tomador de seguro o asegurado, su cónyuge o compañero permanente sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, sus socios, representantes legales o personal directivo del mismo a quienes este haya confiado la dirección y control de la empresa para el desarrollo de su objeto social***

(...)

*“Esta póliza no ampara las pérdidas o daños, que sean ocasionadas directa o indirectamente por: (...) 2.5. **Infidelidad o actos deshonestos de los accionistas o socios, administradores o cualquiera de los empleados del asegurado y los faltantes de inventario**” (subrayado y negritas propias).*

Las anteriores exclusiones además de que se encuadran perfectamente en los hechos materia de investigación bajo el PRF-2018-01178, se tiene que no fueron debidamente valoradas por la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca incurriendo con dicha omisión en una vulneración flagrante de los artículos 1045, 1054, 1056 y 1072, en especial, el tercero de ellos pues debe tenerse en cuenta que la libertad contractual consagrada en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1602 del Código Civil tiene directa aplicación en materia aseguradora cuando el estatuto mercantil de 1971 expresa de manera claro que:

*“Con las restricciones legales, **el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos** a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado.”*

Dicho artículo evoca los amparos, o, exclusiones, a las que las partes puedan llegar libremente en el marco de su autonomía privada. Según la doctrina nacional, la segunda forma en que se manifiesta la libertad contractual de las partes en el negocio jurídico del seguro, esto es la exclusión, consiste en lo siguiente:

“La exclusión es la forma lícita de reducir el riesgo, esto es de limitarlo, de manera que se concreta a ciertas cosas o hechos, pero no abarca ni se extiende a otros. Por consiguiente,

sólo el riesgo contratado queda amparado, y quedan por fuera de tal amparo o protección aquellos que, aun siendo asegurables, los contratantes los han excluido expresamente.”⁶

Las exclusiones en el contrato de seguro también han sido explicadas por la jurisprudencia nacional poniendo de presente lo siguiente:

*“La finalidad del contrato de seguro y a lo que apunta la intención común de los contratantes de este tipo de negocios jurídicos es obtener cobertura frente a determinados riesgos, cuya realización conduce al pago de la respectiva indemnización (art. 1054 del C. de Co.). Es claro también que el acuerdo de las partes para que se brinde amparo a una determinada clase de riesgos determina que, en principio, todos aquellos sucesos inciertos que se enmarquen dentro de los parámetros así establecidos sean objeto de la correspondiente cobertura. Sin embargo, es igualmente evidente, por así disponerlo la legislación nacional (art. 1056 del C. de Co), que en el contrato de seguro, y, particularmente, por determinación del asegurador, éste, teniendo presentes las restricciones legales, “podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”. En razón de lo anterior, los riesgos cubiertos en el contrato de seguro serán los que correspondan a la clase de amparo que genéricamente se ofrezca, o los que las partes de manera particular y explícita convengan adicionar, **siempre y cuando, en uno u otro caso, respecto de los mismos no se establezca expresamente una exclusión por determinación del asegurador, claro está, aceptada por el tomador al perfeccionar la celebración del respectivo contrato.**”⁷ (énfasis añadido).*

Otro tanto ha dicho la jurisprudencia arbitral⁸ sobre el particular:

“4.1 La delimitación del riesgo en el contrato de seguro. Su trascendencia en la esfera aseguraticia:

Sobre este particular, sea lo primero anotar que, como bien es sabido, la posibilidad de delimitar el riesgo en el contrato de seguro, traza, in potentia, el cauce de la obligación indemnizatoria del asegurador, como quiera que, en puridad, esta última se encuentra justamente condicionada a la realización del riesgo asegurado -o los riesgos asegurados- y, en consecuencia, mientras dicha condición no se cumpla en la praxis contractual, el correspondiente deber de prestación no surgirá a la vida jurídica⁹; ello obedece, en sana lógica, a la posibilidad con que cuenta el asegurador de delimitar el estado del riesgo, institución estructural del de la relación aseguraticia y una de las figuras en las que descansa el seguro considerado in globo, esto es, desde una perspectiva técnica,

⁶ Becerra Toro, R. (2014). *Nociones fundamentales de la teoría general y regímenes particulares del contrato de seguro*. Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Jurídica y Política, Carrera de Derecho. Pág.190.

⁷ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de diciembre de 2008. Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez. Radicado No. 11001-3103-012-2000-00075-01.

⁸ Laudo del 15 de diciembre de 2009 Tribunal de Arbitramento Quala S.A. Vs. Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A.

⁹ Desde el ángulo inmediatamente señalado, como bien lo anota el profesor Abel B. Veiga Copo, “... pueden definirse las cláusulas delimitadoras como aquellas que sirven para definir y concretar el objeto del contrato del seguro de que se trate, de manera que todo acontecimiento o evento acaecido fuera de aquella delimitación, o que constituya una circunstancia de exclusión de cobertura, no tendrá la consideración de siniestro cubierto por la póliza ...”. *Condiciones en el contrato de seguro*, Editorial Comares, Granada, 2005, p.278.

financiera y jurídica, habida cuenta de que, en principio, per se, naturalmente con excepciones, "... ningún asegurador estará dispuesto a asegurar todos los riesgos que puedan afectar a nuestras cosas o a nuestro patrimonio ...".

*Así, si se parte de la base de que "... la prestación del asegurador(...) va a depender de la producción del evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, es decir, de un hecho futuro e incierto, al menos en una forma relativa, en el sentido de que puede tratarse de un evento que se sabe que se va a producir pero no cuándo (..) y de que el riesgo es objeto de la cobertura dentro de los límites pactados, de manera que es el riesgo que se encuentra dentro de los límites y de las modalidades establecidas en el contrato, el que, como riesgo asegurado, condiciona la obligación del asegurador ... "*¹⁰, resulta palmario que *"... la posibilidad de limitación de los riesgos es indispensable para el asegurador (...) teniendo presente que sólo se llega a definir cada riesgo y a limitarlo con precisión, si puede medirse y apreciarse su valor para fijar la suma asegurada, la prima y la indemnización o el beneficio: sólo se puede agruparlos en mutualidad y realizar su compensación, si es posible efectuar una clasificación exacta de los riesgos..."*¹¹ (énfasis añadido).

De conformidad con la abundante doctrina y jurisprudencia citada *in extenso*, se observa que la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 excluyó los hechos que fueron materia de investigación fiscal y en los cuales presuntamente incurrió CARLOS ANDRES GARCIA ORTIZ.

Por todo lo anterior, el fallo No. 010 con responsabilidad fiscal proferido dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178, y, los actos que resolvieron los recursos interpuestos de conformidad con el artículo 163 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se expidieron con infracción de las normas en que debían fundarse, específicamente, con vulneración y desconocimiento de facultad legal contemplada en el artículo 1056 del Código de Comercio que tienen las compañías aseguradoras para asumir los riesgos a su arbitrio y en ese sentido excluir de la cobertura hechos como los ventilados en el proceso ordinario de responsabilidad fiscal.

C. EL FALLO No. 010 CON RESPONSABILIDAD FISCAL PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2018-01178 Y LOS DEMÁS ACTOS QUE RESOLVIERON LOS RECURSOS INTERPUESTOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 163 DEL CPACA SE EXPIDIERON SIN COMPETENCIA – LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA NO

¹⁰ SÁNCHEZ CALERO, Fernando. *Ley de Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50 de 1980, de 8 de octubre y sus modificaciones*. Aranzadi Editorial. Navarra. 1999. p.33; a lo que el profesor Sánchez Calero agrega que en el seguro se "... ha de individualizar el riesgo que se quiere asegurar, que depende de la naturaleza del evento que se pretende asegurar y del interés sobre el cual debe verificarse el evento, debiendo producirse en el contrato una delimitación de ese riesgo, con precisión de las causas del evento, el tiempo y el espacio en que debe verificarse (...) las cláusulas establecidas en el contrato no limitan 'los derechos del asegurado, sino que delimitan el riesgo asumido en el contrato, su contenido, el ámbito al que el mismo se extiende', lo que constituye un límite objetivo nacido de la voluntad pactada de las partes ... ". *Ibidem*, p.33.

¹¹ HALPERIN, Isaac. *Seguros. Exposición crítica de la ley 17.418*. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1972. p.342.

TENÍA COMPETENCIA PARA ANULAR O DECLARAR LA INEFICACIA DEL CONTRATO DE SEGURO Y/O SUS CLÁUSULAS – INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 29 CONSTITUCIONAL

El fallo No. 010 con responsabilidad fiscal proferido dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178 y los demás actos que resolvieron los recursos interpuestos de conformidad con el artículo 163 del CPACA se expidieron sin competencia, pues lo cierto es que la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca no tenía ni la competencia constitucional, ni legal y mucho menos reglamentaria para anular o declarar la ineficacia del contrato y/o de las cláusulas del seguro documentado en la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488.

Para sustentar el concepto de violación propuesto debe tenerse en cuenta que la garantía constitucional del “*juez natural*” está expresamente consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política:

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

*Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, **ante juez o tribunal competente** y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.*

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”
(subrayado y negritas propias).

De igual forma, frente a la competencia de la Administración Pública, en este caso la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental del Valle del Cauca, se tiene que el artículo 6º de la Constitución Política de Colombia prevé que los servidores públicos serán responsables por infringir la Constitución y las leyes y por extralimitación en el ejercicio de sus funciones:

“ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.”

Aunado a lo anterior, y como reflejo de la importancia del principio de legalidad, se tiene que el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia establece que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento:

“ARTICULO 122. <Artículo corregido por Aclaración publicada en la Gaceta No. 125> No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. (...)”

Visto todo lo anterior, se tiene que frente a las autoridades y, en especial, frente a la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, la Constitución o la ley debe otorgar las competencias para las actividades que despliegan, máxime cuando ciertos actos como el de administrar justicia y declarar o restar validez a los actos y negocios jurídicos están reservados, en principio, a la rama jurisdiccional.

Para el caso en concreto, lo cierto es que ni la Constitución Política, ni la Ley 610 de 2000 y mucho menos la Ley 1474 de 2011 contemplan la posibilidad de que la Contraloría General de la República sea el juez natural de un contrato y si bien el artículo 44 de la Ley 610 de 2000 permite que las compañías aseguradoras sean vinculadas al proceso de responsabilidad fiscal, lo cierto es que dicha competencia no se puede extender hasta declarar la terminación del contrato o declarar su nulidad total o de alguna de sus cláusulas.

Visto lo anterior, debe recordarse en el desarrollo del presente concepto de violación los contenidos propios de la causal de nulidad consagrada en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por falta de competencia. Sobre la falta de competencia como causal de nulidad la doctrina nacional ha mencionado lo siguiente:

“El vicio se puede presentar en dos situaciones, así:

En primer lugar, porque quien expida el acto carezca de toda atribución administrativa para expedirlo, es decir, que el autor del acto, en palabras de Vedel es un usurpador de poder que se inmiscuye en la Administración sin título ni capacidad, lo que origina que el acto, más que anulable por vicios de incompetencia, es inexistente. En este aspecto hay que tener en cuenta que bajo ciertas circunstancias, los actos de los denominados funcionarios de hecho o de facto, pueden llegar a tener validez especialmente frente a terceros, para proteger la buena fe de estos en las actuaciones, en el entendido que dichos funcionarios de facto hayan adquirido una investidura irregular en la Administración, frente a los funcionarios vinculados con el cumplimiento de todos los requisitos legales. Cosa distinta será la usurpación burda de la función, en donde el acto es inexistente.

*En segundo lugar, porque teniendo atribuciones administrativas, el funcionario se arroga algunas que no le corresponden; en este caso la incompetencia se presenta en tres aspectos fundamentales, como son: la incompetencia en razón de la material del acto, del lugar de expedición y de la época de expedición del mismo; que los clásicos del derecho denominan: *ratione materiae*, *ratione loci* y *ratione temporis*.*

La incompetencia en relación con la material del acto, hace referencia a que el asunto respecto del cual se decide en el mismo, por su naturaleza corresponde a otro funcionario, que en igual forma tiene autoridad administrativa dentro de la jurisdicción donde se está profiriendo; en este caso podemos tener la decisión que toma el Secretario Municipal de Tránsito en un asunto que le corresponde al Secretario de Educación.

En lo relacionado con la incompetencia por el lugar de expedición del acto, hace alusión a que el funcionario que lo profiere no tiene autoridad administrativa en el lugar donde supuestamente va a regir y surtir efectos administrativos. Tal es que el Alcalde de Tunja otorgue por intermedio de su Secretario de Planeación, la autorización de una obra que se va a ejecutar en el municipio de Villa de Leyva.

Frente a la incompetencia por razón del tiempo de expedición del acto, debemos decir, que se refiere a que el acto es proferido sin que la competencia administrativa aún se lo permita, por ejemplo, el nombramiento de un funcionario por parte del alcalde municipal, cuando el cargo todavía no ha sido creado, sino que está en proyecto de trámite de creación.

(...)¹²

Para el caso en concreto, el Fallo No. 010 con responsabilidad fiscal proferido dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178 y los demás actos que resolvieron los recursos interpuestos de conformidad con el artículo 163 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo fueron expedidos sin competencia, pues, como se explicó previamente, ni la Constitución Política, ni la Ley 610 de 2000 y mucho menos la Ley 1474 de 2011 le otorgaron la competencia a la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental del Valle del Cauca para declarar la nulidad del contrato de seguro o declarar que algunas de sus cláusulas son ineficaces.

D. EL FALLO No. 010 CON RESPONSABILIDAD FISCAL PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2018-01178 Y LOS DEMÁS ACTOS QUE RESOLVIERON LOS RECURSOS INTERPUESTOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 163 DEL CPACA SE EXPIDIERON CON INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1602 DEL CÓDIGO DE CIVIL, 864 Y 1056 DEL CÓDIGO DE COMERCIO – EL CONTRATO DE SEGURO ES DE INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA

El fallo No. 010 con responsabilidad fiscal proferido dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178 y los demás actos que resolvieron los recursos interpuestos de conformidad con el artículo 163 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se expidieron con infracción de los artículos 1602 del Código Civil y 864 del Código de Comercio pues desatendieron la voluntad de las partes del contrato de seguro documentado en la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488, en especial, las exclusiones pactadas en el mismo, y le dieron una interpretación amplia y genérica a un negocio que como el seguro debe ser interpretado de manera restrictiva y específica.

Para sustentar el concepto de violación invocado debe tenerse presente que el artículo 1602 del Código Civil dispone lo siguiente:

¹² Güecha Medina, C. N., & Güecha Torres, J. T. (2021). Derecho procesal administrativo (Quinta ed.). Grupo Editorial Ibañez - Universidad Santo Tomás. Págs. 391 a 392.

“Artículo 1602. Los contratos son ley para las partes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.”

A su vez, el artículo 864 del Código de Comercio prescribe que:

“ARTÍCULO 864. <DEFINICIÓN DE CONTRATO>. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta.”

De los artículos traídos a colación resulta claro que todo contrato legamente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por mutuo consentimiento o causas legales, circunstancias dentro de las cuales no se enlista de ninguna manera la posibilidad de que la Contraloría General de la República derogue los pactos a los que llegaron las partes o interprete las cláusulas como las de exclusiones restándole efecto a las mismas.

Para el caso en concreto, se tiene que la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca incurrió en una infracción de los artículos 1602 del Código Civil y 864 y 1056 del Código de Comercio, pues, a pesar de que resultaba claro que las partes del contrato de seguro documentado en la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 habían **EXCLUIDO** los daños o pérdidas ocasionadas directamente o indirectamente por faltantes de inventario, circunstancia en la que incurrió en presunto responsable fiscal, sin explicación alguna la entidad demandada decidió no tener en cuenta la citada cláusula:

“- Exclusión del numeral 2.5: “Esta póliza no ampara las pérdidas o daños, que sean ocasionadas directa o indirectamente por: (...) 2.5. Infidelidad o actos deshonestos de los accionistas o socios, administradores o cualquiera de los empleados del asegurado y los faltantes de inventario” (Negrilla fuera del texto).

La citada exclusión, se encuentra condicionada a demostrar que CARLOS ANDRES GARCIA, incurrió en actos de infidelidad o actos deshonestos, dicha calificación corresponde a una valoración subjetiva y moral de la actuación del señor GARCIA, ligada a su honradez o rectitud frente al daño causado a los bienes que se encontraban a su cargo; valoración que implica endilgarle una responsabilidad por una conducta dolosa, lo cual no ha quedado demostrando dentro del proceso que nos ocupa, pues de las pruebas arribadas se puede deducir claramente una responsabilidad por culpa grave como fue expuesto, pero no dolosa.”

La interpretación realizada por la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca no sólo contraviene la literalidad de la exclusión pactada en la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 frente a la **NO** cobertura de “faltantes de inventario” sino que, además y lo más preocupante, es que la omite de manera consciente, quebrantando con todo ello la voluntad de las partes del contrato de seguro en cuestión y el artículo 1056 del Código de Comercio sobre la libertad que tienen las compañías aseguradoras para asumir, a su arbitrio, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados.

Frente al ejercicio interpretativo, o más bien, frente al nulo ejercicio interpretativo realizado por la autoridad demandada, valga la pena recordar que, la labor que cumplen los operadores jurídicos no es la de reemplazar a las mismas partes en las cláusulas que interpretan, de suerte que, si el la cláusula o el contrato son lo suficientemente claros, la labor del operador queda limitada al tenor literal de lo pactado, impidiéndose desatender dicho tenor so pretexto de consultar el espíritu de la obligación, de ese parecer es la doctrina mayoritaria. Así, por ejemplo, menciona el ya extinto profesor Fernando Hinestrosa lo siguiente:

*“...la lógica y el buen sentido imponen al juez temperamento y coherencia, en cuanto no puede, so pretexto de ambigüedad de un texto, dada la ‘falibilidad del lenguaje’ o la anfibología de un signo, lanzarse a un entendimiento que riña con el sentido propio de ellos. La regla no se encuentra en el código dentro del elenco del título ‘De la interpretación de los contratos’, pero sí aparece en lo que hace a la ‘Interpretación de la ley’: “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu” (art. 27). **Gráficamente se dice que al juez no le está permitido reescribir el contrato.**” (énfasis añadido).*

Lo dicho por la doctrina es igualmente afirmado por la jurisprudencia, en especial, cuando se afirma que el contrato de seguro es de interpretación restrictiva, como bien lo ha entendido desde antaño la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia¹³:

*“... en cuanto al contrato de seguro propiamente dicho, ha sostenido la Corte que **“debe ser interpretado en forma similar a las normas legales y sin perder de vista la finalidad que está llamado a servir, esto es comprobando la voluntad objetiva que traducen la respectiva póliza y los documentos que de ella hacen parte con arreglo a la ley** (Arts. 1048 a 1050 del C de Com), los intereses de la comunidad de asegurados y las exigencias técnicas de la industria. Dicho en otras palabras, **el contrato de seguro es de interpretación restrictiva y por eso en su ámbito operativo, para determinar con exactitud los derechos y las obligaciones de los contratantes, predomina el texto de la que suele denominarse ‘escritura contentiva del contrato’**” (Sentencia de Casación Civil 002 del 29 de enero de 1998).” (énfasis añadido).*

Posición que también ha adoptado la jurisprudencia arbitral al afirmar lo siguiente:

*“A este respecto, cumple rememorar que reiterada doctrina y jurisprudencia, han coincidido por centurias en que **la interpretación del seguro, para que el contrato sea viable jurídica y técnicamente, debe ser una interpretación limitada** o acotada en función de la cobertura otorgada.*

De ahí que la Corte Suprema de Justicia tenga definido de antaño, como tuvo la oportunidad de reiterarlo en una providencia escollada por la lógica, “. . . que el contrato de seguros debe ser interpretado en forma similar a las normas legales y sin perder de vista la finalidad que está llamado a servir, esto es comprobando la voluntad objetiva que traducen la respectiva póliza y los documentos que de ella hacen parte con arreglo a la ley (arts. 1048 a 1050 del C. de Co.), los intereses de la comunidad de asegurados y las

¹³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 1º de agosto de 2002. Magistrado Ponente: Jorge Santos Ballesteros. Expediente No. 6907.

exigencias técnicas de la industria; que, en otras palabras, el contrato de seguro es de interpretación restrictiva y por eso en su ámbito operativo para determinar los derechos y las obligaciones de los contratantes predomina el texto de la que suele denominarse escritura contentiva del contrato en la medida en que por definición, debe conceptuársela como expresión de un conjunto sistemático de condiciones generales y particulares que los jueces deben examinar con cuidado, especialmente en lo que tiene que ver con las cláusulas atinentes a la extensión de los riesgos cubiertos en cada caso y su delimitación (...). La Corte ha deducido como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros, la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLV/11, pág. 176), y ha extraído, con soporte en el artículo 1056 del Código de Comercio, la vigencia en nuestro ordenamiento de un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, en virtud del cual se otorga al asegurador la facultad de asumir a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados. el patrimonio o la persona del asegurado" (cas. Civ. 24 de mayo 2005, SC-089-2005 {7495}). "Por lo anterior, ha señalado la Sala, no puede el intérprete so pena de sustituir indebidamente a los contratantes interpretar aparentemente el contrato de seguro para inferir riesgos que no se han convenido. ni para excluir los realmente convenidos, ni tampoco hacer interpretaciones de tales cláusulas que conlleven a resultados extensivos de amparo de riesgos a otros casos que no solo se encuentran expresamente excluidos, sino que por su carácter limitativo y excluyente son de interpretación restringida (cas. civ. 23 de mayo de 1988, exp. 4984).

En el mismo sentido, el profesor Ruben Stiglitz expresa que "... habrá de estarse a la literalidad de los términos utilizados cuando proceda la interpretación restrictiva. Por ejemplo, el objeto del contrato de seguro constituido por el riesgo, en cuanto a su extensión, debe ser interpretado literal o restrictivamente, pues de otro modo se provocaría un grave desequilibrio en el conjunto de las operaciones que efectúa el asegurador (...) Sobre el particular se tiene expresado que la extensión del riesgo y los beneficios otorgados por el contrato de seguro deben interpretarse literalmente pues su ampliación producirá un grave desequilibrio en el conjunto de las operaciones de la aseguradora ... " (se subraya). A lo anterior se une el profesor Louis Josserand, quien en forma categórica sostiene que el seguro " ... es uno de los raros contratos de derecho estricto, 'de derecho estrecho', que existen en nuestros días (...) las cláusulas del mismo comportan una interpretación rigurosa..."

Por su parte, el profesor Isaac Halperin, agrega, además, que "... la naturaleza del contrato de seguro o la importancia de los conflictos en juego, han llevado a establecer que: a) la extensión del riesgo y los beneficios otorgados deben interpretarse literalmente; (..) e) las restricciones a la libre actividad del asegurado deben formularse expresamente; d) la responsabilidad asumida en términos generales, como fin del contrato, sólo puede restringirse por cláusulas expresas ... '.

Y es que abundan las razones que explican la importancia de la regla en comento, esto es, de la restrictividad en la hermenéutica del contrato de seguro, principiando, ad baculum, por la estructura técnica y económica del mismo. Al respecto, cumple anotar que si se permitiera una interpretación extensiva o amplificada de los amparos, perdería toda viabilidad jurídica y técnica la celebración de contratos de seguro, como quiera que, en estrictez, la actividad aseguradora supone una pericia del asegurador, que le permite evaluar cada contingencia y, con base en ello, determinar cuáles riesgos asume y

cuáles no, lo que en principio es legítimo, amén que permitido, fijando con base en concienzudos estudios técnicos y financieros una prima como contraprestación por la asunción de dichos riesgos. Pero si el asegurador no sabe con certeza a qué se compromete, tendrá que fijar primas excesivamente onerosas para acaparar todas las contingencias o, simplemente, optará por retirarse del mercado, al no poder conocer, a ciencia cierta, el contenido prestacional a que se está obligando y, en consecuencia, no poder hacer una previsión técnica y financiera.”¹⁴ (énfasis añadido).

Nótese, de la copiosa jurisprudencia y doctrina traída a colación, que la interpretación del contrato de seguro no es una cuestión donde el operador jurídico, en este caso la Contraloría General de la República, conste de un amplio margen de movilidad, sino que, por el contrario, es uno de los casos excepcionales donde el negocio jurídico aseguratorio debe ser interpretado de forma estricta a semejanza de cómo se realiza la interpretación de las disposiciones legales, siendo pertinente afirmar que, al igual que ocurre con las leyes, si el contrato de seguro es claro en su literalidad, al juzgador no le es válido interpretar sus cláusulas so pretexto de consultar su espíritu (art. 27 C.C.).

Por todo lo anterior, resulta claro que el fallo No. 010 proferido por la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental del Valle del Cauca incurrió en una infracción de los artículos 1602 del Código Civil y 864 y 1056 del Código de Comercio, pues interpretó de manera general y abstracta el contrato de seguro documentado en la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 cuando resultaba claro que una interpretación restrictiva de dicho negocio jurídico indicaba que los hechos materia de investigación fiscal habían sido excluidos de la cobertura y por ende mi representada no tenía obligación legal y/o contractual alguna de asumir los resultados de dicho procedimiento.

E. EL FALLO No. 010 CON RESPONSABILIDAD FISCAL PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2018-01178 Y LOS DEMÁS ACTOS QUE RESOLVIERON LOS RECURSOS INTERPUESTOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 163 DEL CPACA SE EXPIDIERON MEDIANTE FALSA MOTIVACIÓN

El fallo No. 010 con responsabilidad fiscal proferido dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178 y los demás actos que resolvieron los recursos interpuestos de conformidad con el artículo 163 del CPACA se expidieron mediante falsa motivación, pues, a pesar de que la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 había excluido expresamente los faltantes de inventario que eran materia de investigación fiscal, es decir, dicho contrato de seguro no amparaba los hechos ventilados al interior del proceso, la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental del Valle del Cauca de manera inexplicable decidió afectar dicha póliza bajo la argumentación de que esta tenía un deducible menor, todo lo anterior sin tener en cuenta temas los elementos esenciales de dicho negocio jurídico.

Frente a la causa de nulidad invocada, esto es, la falsa motivación, la doctrina nacional apoyándose en la jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha tenido a bien en decir lo siguiente:

¹⁴ Laudo Arbitral 15 de diciembre de 2009. Quala S.A. Vs. Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. Árbitro: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.

*“En la causal de anulación por falsa motivación del acto, la autoridad administrativa que lo profiere es competente para expedirlo, cumple con todas las formalidades legales y en principio el mismo se ajusta al ordenamiento objetivo, pero los fundamentos de hecho que lo originan no corresponden a la realidad. La falsa motivación para algunos doctrinantes puede darse por dos circunstancias específicas como son: **la ausencia de motivos** o el error en los motivos que originaron, el acto.*

(...)

De acuerdo a lo estudiado podemos decir, que la falsa motivación está determinada por la discordancia existente en los motivos consignados y generadores del acto administrativo y la realidad fáctica; lo que determina una tergiversación de la realidad jurídica. El Consejo de Estado, al referirse a la falsa motivación ha dicho:

*“Una motivación puede ser calificad falsa, para que esa clase de ilegalidad se dé en un caso determinado, es necesario que los motivos alegados por el funcionario que expidió el acto, en realidad no haya existido o **no tengan el carácter jurídico que el autor le ha dado, o sea que se estructure la ilegalidad por inexistencia material o jurídica de los motivos**, por una parte, o que los motivos no sean de tal naturaleza que justifiquen la medida tomada.”¹⁵*

(...)”¹⁶

Para el caso en concreto, lo cierto es que el fallo No. 010 del 3 de octubre de 2023 proferido por la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental del Valle del Cauca incurrió en la causal de nulidad expuesta, pues lo cierto es que la decisión de afectar la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 no se basó en los amparos y coberturas de la misma, sino que, más bien, obedeció a una decisión arbitraria tomada por la entidad convocada.

En el Auto No. 775 de 4 de diciembre de 2023, la Gerencia Departamental del Valle del Cauca expone las razones por las cuales decidió afectar la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 de la siguiente manera:

“De la citada certificación se deduce que en caso de afectarse únicamente la Póliza de Manejo Global Entidades Estatales No. 2201215004476, no se obtiene el resarcimiento o indemnización integral del daño que se encuentra amparado tanto por dicha póliza como por la póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488.

¹⁵ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de junio 21 de 1989. Consejero Ponente: Álvaro Lecompte Luna.

¹⁶ Güecha Medina, C. N., & Güecha Torres, J. T. (2021). Derecho procesal administrativo (Quinta ed.). Grupo Editorial Ibañez - Universidad Santo Tomás. Págs. 399 – 400.

*En consecuencia, ejecutoriado el fallo con responsabilidad fiscal, el Despacho podrá requerir la indemnización del daño por parte de cualquiera de las dos pólizas, hasta el monto pactado en el contrato de seguros y disponible, con preferencia de la póliza que cubre mejor el riesgo, **esto es la póliza con menor deducible** (4% en la póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488), sin perjuicio de tener que afectar la Póliza de Manejo Global Entidades Estatales No. 2201215004476, en cuanto el valor asegurado por la primera póliza se hubiese agotado.” (subrayado y negritas propias).*

Como se observa, la decisión de la autoridad convocada para afectar la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 fue absolutamente caprichosa y arbitraria, pues, en lugar de verificar que dicha póliza contara con un amparo de responsabilidad fiscal, o, que los hechos materia de investigación fiscal no estuviesen excluidos como de hecho lo estaban decidió hacer efectivo el amparo de la póliza en cuestión por el simple hecho de que esta tenía un deducible menor.

La motivación de la entidad convocada al proferir el Fallo No. 010 y el Auto No. 775 de 4 de diciembre de 2023 mediante el cual se aclaró la anterior decisión, no sólo resulta carente de motivos lo que hace incurrir a dichas decisiones administrativas en la causal de nulidad invocada, sino que, además, contraviene de manera directa la Circular No. 05 del 16 de marzo de 2020 donde se estableció lo siguiente:

*“Es importante que, además de identificar la **modalidad de cobertura**, el operador fiscal verifique los demás elementos de la póliza, como su periodo de prescripción, de retroactividad, **las exclusiones que establezca, sus amparos**, deducible, valor y de ser posible determinar si la misma ya había sido afectada, lo cual puede afectar la suma asegurada”. (Subrayo y resalto por fuera del texto)*

Para el caso en concreto resulta claro que los actos administrativos acusados incurrieron en una falsa motivación, pues no resulta lógico, sino que, por el contrario, es caprichoso y arbitrario que se afecte una póliza que no presta cobertura material debido a que los hechos objeto de investigación fiscal han sido expresamente excluidos por la pueril razón de que el deducible pactado es menor

F. EL FALLO No. 010 RESPONSABILIDAD FISCAL PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2018-01178 Y LOS DEMÁS ACTOS QUE RESOLVIERON LOS RECURSOS INTERPUESTOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 163 DEL CPACA SE EXPIDIERON CON INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 120 DE LA LEY 1474 DE 2011 Y 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Por último, se tiene que el Fallo No. 010 con responsabilidad fiscal proferido dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178 y los demás actos que resolvieron los recursos interpuestos de conformidad con el artículo 163 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se expidieron con infracción de los artículos 120 de la Ley 1474 de 2011 y 1081 del Código de Comercio, pues para el momento en que se expidió dicho fallo, esto es, el 3 de octubre de 2023, las acciones derivadas del contrato de seguro ya se encontraban prescritas.

En el caso en cuestión, se configuró la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 1474 de 2011. Esta conclusión se

fundamenta en que el lapso transcurrido desde la ocurrencia y/o conocimiento de los hechos hasta la emisión del fallo que estableció la responsabilidad fiscal, por cuanto superó el período de cinco (5) años establecido por la normativa mencionada. Dicha prescripción afectó directamente a las acciones derivadas del contrato de seguro reflejado en la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488.

Al respecto cabe señalar que la Contraloría tuvo conocimiento de los hechos objeto de la acción fiscal el día 21 de junio de 2017, cuando se efectuó el traslado del hallazgo fiscal. No obstante, no fue hasta el 10 de noviembre de 2022, cuando profirió el auto de vinculación No. 761, es decir, 5 años y 5 meses después de adquirido dicho conocimiento, y hasta el 03 de octubre de 2023 que dictó un fallo con responsabilidad fiscal declarando civilmente responsable a Allianz Seguros S.A., lapso de tiempo que, al superar el plazo legalmente establecido, dio lugar a la prescripción de las acciones derivadas del mencionado contrato de seguro.

Por todo lo anterior se tiene que el fallo No. 010 del 03 de octubre de 2023 y los actos administrativos proferidos dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal incurrieron en una infracción de las normas en que debían fundarse, en especial, la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental del Valle del Cauca desconoció el término prescriptivo establecido en el artículo 120 de la Ley 1474 de 2011, pues sólo se limitó a analizar la improcedencia de la prescripción establecida en el artículo 1081 del Código de Comercio, señalando que no era viable aplicarla al caso en concreto.

Para contabilizar el término prescriptivo de que trata el artículo 120 de la Ley 1474 de 2011, se debe tener en cuenta la ocurrencia de los hechos, el conocimiento de estos y/o si se trata de un hecho continuado, la última fecha de vigencia de la póliza hasta la fecha de expedición y/o notificación del fallo con responsabilidad fiscal, mediante el cual se declara civilmente responsable a la aseguradora.

Descendiendo al caso en concreto, se puede observar que la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental del Valle del Cauca tuvo conocimiento de los hechos el día 21 de junio de 2017, cuando se trasladó el hallazgo, hechos que correspondieron a unos de tracto sucesivo acaeciendo el último el día 25 de septiembre de 2015, fecha de la transacción No. 141 Acta de Baja de Almacén y, por otro lado, el fallo con responsabilidad fiscal se expidió hasta el 03 de octubre de 2023, es decir, habiendo transcurrido seis (6) años, y cuatro (4) meses después de tener conocimiento de los mismos, lo que hace evidente la configuración de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.

En conclusión, resulta claro que el fallo No. 010 del 03 de octubre de 2023 y los demás actos que resolvieron los recursos de reposición presentados incurrieron en la causal de nulidad establecida en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, específicamente, vulneraron el alcance y contenido del artículo 1081 del Código de Comercio y 120 de la Ley 1474 de 2011.

Capítulo VIII. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

La cuantía del presente trámite se estima en un valor de **DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$12.543.840)** correspondiente al monto impuesto en contra de mi representada, Allianz Seguros S.A., como coaseguradora de la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488, en el Fallo No. 010 con responsabilidad fiscal del 03 de octubre de 2023, que surtió grado de consulta mediante el Auto No. URF2- 0054 del 15 de enero de 2024.

Capítulo IX. JURAMENTO

En representación de **ALLIANZ SEGUROS S.A.**, respetuosamente me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que no se ha presentado demanda o solicitud alguna por los mismos hechos y pretensiones.

Capítulo X. COMPETENCIA

La competencia para conocer del presente asunto corresponde a los Juzgados Administrativos de Santiago de Cali, teniendo en cuenta que el ente que profirió los actos administrativos sobre los cuales se pretende la nulidad es la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA**. De manera que, en virtud del numeral 3º del artículo 155 y numeral 2º del artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por tratarse de un asunto que no excede la cuantía de los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y por haberse expedido los actos administrativos cuestionados en la ciudad de Cali, su conocimiento será competencia de los Juzgados Administrativos de la ciudad en cuestión en primera instancia.

La presente demanda deberá tramitarse por el procedimiento ordinario establecido para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 subrogado por la Ley 2080 de 2021).

Capítulo XI. PRUEBAS

• DOCUMENTALES:

1. Auto No. 0671 de fecha 14 de diciembre de 2018 *“POR EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF2018-01178. ENTIDAD AFECTADA: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.”*
2. Auto No. 353 de imputación de responsabilidad fiscal dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178 de fecha 24 de mayo de 2023.
3. Fallo No. 010 con responsabilidad fiscal del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178 de fecha 03 de octubre de 2023.

4. Auto No. 742 de fecha 10 de noviembre de 2023 que resuelve recursos de reposición contra el Fallo No. 010 con responsabilidad fiscal proferido en el proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178.
5. Auto No. 775 de fecha 4 de diciembre de 2023 que resuelve solicitud de aclaración del Fallo No. 010 con responsabilidad fiscal proferido dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178.
6. Auto No. URF2- 0054 del 15 de enero de 2024 por medio del cual se resuelve el grado de consulta del fallo con responsabilidad fiscal No. 010 del 3 de octubre de 2023 dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178.
7. Demás actos administrativos que los integren, aclaren, adicionen, modifiquen, les sean accesorios, consecuentes o subsiguientes; proferidos dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178.
8. Constancia de pago realizada en el Banco Popular, comprobante para recaudos empresariales N°2856519 por valor de e DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$12.543.840) pagado a favor de la Dirección del Tesoro Nacional a la cuenta corriente No. 110-050-00119-7 del Banco Popular.
9. La Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 y su condicionado general.
10. Constancia de radicación de la solicitud de conciliación.
11. Auto del 24 de junio de 2024 proferido por la Procuraduría 19 Judicial Para Asuntos Administrativos.
12. Recurso contra el auto del 24 de junio de 2024 proferido por la Procuraduría 19 Judicial Para Asuntos Administrativos
13. Constancia de radicación de recurso contra auto el auto del 24 de junio de 2024 proferido por la Procuraduría 19 Judicial Para Asuntos Administrativos
14. Auto del 5 de junio de 2024.

• **DECLARACIÓN DE PARTE:**

Al tenor de lo preceptuado por el artículo 198 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa de los artículos 211 y 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, comedidamente solicito al despacho ordenar la citación del representante legal de **ALLIANZ SEGUROS S.A.** para que sea interrogado por el suscrito sobre los hechos relacionados con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que nos ocupa y especialmente, para que disponga sobre las condiciones concertadas en la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No.

2201215004488, así como sobre los motivos de violación de los actos demandados, y especialmente para que declare sobre las razones de la inconformidad puesta de presente dentro de la demanda que ocupa la atención del juzgador de instancia.

• **TESTIMONIALES:**

Respetuosamente, solicito a este despacho decretar el testimonio del Doctor **JAVIER ANDRÉS ACOSTA CEBALLOS**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cali, asesor externo de la Compañía de seguros que represento, **ALLIANZ SEGUROS S.A.**, quien podrá citarse en la dirección de correo electrónico: jacosta@gha.com.co, con el objeto de que se pronuncie sobre los hechos en que se fundamenta el presente medio de control, así como los motivos de violación de los actos administrativos demandados y especialmente para que declare sobre las razones de la inconformidad puesta de presente dentro de la presente demanda.

Lo anterior se solicita por cuanto es útil para el proceso conocer acerca de cómo operan los contratos de seguro que fundamentan la relación de mi procurada con el presente trámite, así como también para dar a conocer los motivos de los conceptos de violación en que incurrieron los actos administrativos demandado.

• **DE OFICIO:**

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO (Parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo): Solicito comedidamente se ordene a la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aportar al proceso el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder, especialmente los siguientes:

1. Auto No. 0671 de fecha 14 de diciembre de 2018 *“POR EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF2018-01178. ENTIDAD AFECTADA: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.”*
2. Auto No. 353 de imputación de responsabilidad fiscal dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178 de fecha 24 de mayo de 2023.
3. Fallo No. 010 con responsabilidad fiscal del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178 de fecha 03 de octubre de 2023.
4. Auto No. 742 de fecha 10 de noviembre de 2023 que resuelve recursos de reposición contra el Fallo No. 010 con responsabilidad fiscal proferido en el proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178.

5. Auto No. 775 de fecha 4 de diciembre de 2023 que resuelve solicitud de aclaración del Fallo No. 010 con responsabilidad fiscal proferido dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178.
6. Auto No. URF2- 0054 del 15 de enero de 2024 por medio del cual se resuelve el grado de consulta del fallo con responsabilidad fiscal No. 010 del 3 de octubre de 2023 dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178.
7. Demás actos administrativos que los integren, aclaren, adicionen, modifiquen, les sean accesorios, consecuentes o subsiguientes; proferidos dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-2018-01178.
8. Constancia de pago realizada en el Banco Popular, comprobante para recaudos empresariales N°2856519 por valor de e DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$12.543.840) pagado a favor de la Dirección del Tesoro Nacional a la cuenta corriente No. 110-050-00119-7 del Banco Popular.
9. La Póliza Todo Riesgo Daños Materiales No. 2201215004488 y su condicionado general obrantes en el expediente.
10. Certificación de ejecutoria.

El propósito de la exhibición de estos documentos es evidenciar las causales de nulidad en las cuales incurrieron los actos administrativos demandados y así demostrar las razones por las cuales se debe declarar la nulidad de estos.

Capítulo XII. ANEXOS

1. Todos los documentos aducidos como pruebas en el acápite respectivo.
2. Poder general conferido al suscrito mediante Escritura Pública No. 5.107 otorgada el 5 de mayo de 2004 en la Notaría Veintinueve (29) del Círculo de Bogotá D.C.
3. Traslado radicado en la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, copia simple de la demanda y sus anexos.
4. Traslado radicado en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, copia simple de la demanda y sus anexos.

Capítulo XIII. NOTIFICACIONES

A mi representada y al suscrito apoderado en la Calle 69 No. 4 – 48 oficina 502 en la ciudad de Bogotá. Para efectos de notificación electrónica, según lo previsto en el artículo 162 numeral 7, la dirección electrónica es: notificaciones@gha.com.co

A la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca – Unidad Delegada para Responsabilidad Fiscal – Intervención Judicial y Cobro Coactivo, órgano de

control del Estado de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal, sin personería jurídica, representada legalmente por el señor CARLOS MARIO ZULUAGA PARDO, o quien haga sus veces con dirección de notificaciones en la Carrera 69 No 44 - 35 y el correo electrónico cgr@contraloria.gov.co, responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co notificacionesjudiciales@contraloria.gov.co.

A la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la dirección electrónica:
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co y procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.